



CSJ 4148/2015

ORIGINARIO

Red Surcos S.A. c/ Entre Ríos,  
Provincia de s/ acción  
declarativa de certeza.

*Corte Suprema de Justicia de la Nación*

Buenos Aires, 15 de octubre de 2024

Vistos los autos: "Red Surcos S.A. c/ Entre Ríos, Provincia de s/ acción declarativa de certeza", de los que

Resulta:

I) A fs. 79/91 Red Surcos S.A. promueve demanda contra la Provincia de Entre Ríos, a fin de que se haga cesar el estado de incertidumbre en el que dice encontrarse, frente a la pretensión de dicho Estado provincial de aplicarle un tratamiento tributario más gravoso en relación con el impuesto sobre los ingresos brutos para la actividad que realiza de "Fabricación de plaguicidas y productos químicos de uso agropecuario", en razón de no tener su sede central en el territorio de dicha provincia.

Puntualmente, solicita que se declare la inconstitucionalidad del régimen de alícuotas diferenciales previsto, con relación al referido impuesto, en los artículos 20 de la ley 10.183, 2° de la ley 10.251 y 13 de la ley 10.270, todas de esa provincia, así como de toda otra disposición análoga que se dicte durante el proceso.

Explica que Red Surcos S.A. es una empresa cuyo objeto consiste en la producción y comercialización de productos fitosanitarios, veterinarios y semillas dirigidos al mercado agropecuario, que tiene su sede principal, laboratorios, planta de elaboración y desarrollo, y depósitos de almacenaje en la Provincia de Santa Fe, y que se encuentra inscripta como contribuyente del impuesto sobre los ingresos brutos bajo el régimen del Convenio Multilateral.

Relata que la Administración Tributaria de la Provincia de Entre Ríos (ATER) efectuó una fiscalización que resultó en la determinación de ajustes, por el tributo referido, en relación a distintos rubros sobre la base de las

previsiones contenidas en las normas referidas, entre las cuales se encuentra la "fabricación de plaguicidas y productos químicos", que es el que motiva la presente acción, por los períodos 10/2010 a 12/2014. Añade que en esa oportunidad ATER le notificó que se aplicarían las siguientes alícuotas: 2,50% para el período octubre de 2010 a enero de 2012; 3,50% para el período febrero a diciembre de 2012; 4,50% para el período enero a diciembre de 2013, y 5% para el período enero a diciembre de 2014.

Agrega que a partir de la ley 10.251 impugnada se dispuso que las actividades alcanzadas con la alícuota del 3,50% quedaban gravadas al 4,50% cuando se tratara de contribuyentes o responsables cuya sede se encontrara fuera de la Provincia de Entre Ríos, excepto las actividades de construcción y el expendio al público de combustibles líquidos y gas natural comprimido realizado por petroleras.

A su vez, indica que desde la vigencia de la ley 10.270 (1° de enero de 2014) las actividades industriales no realizadas en establecimientos ubicados en Entre Ríos debían tributar al 5,00%.

Añade que el 11 de marzo de 2015, impugnó el ajuste del fisco provincial y que este último le corrió una nueva vista y le reclamó la suma de \$ 1.128.190,31 por la actividad que se cuestiona en autos. Agrega que con posterioridad, el organismo fiscal dictó la resolución 200/2015, y resolvió rechazar parcialmente el descargo interpuesto y determinó que la actora incurrió en incumplimiento culpable de su obligación de abonar tributos y le aplicó una multa graduada en un porcentaje igual al 100% omitido. Finalmente, el 26 de agosto de 2015, la actora interpuso recurso de reconsideración contra dicha disposición.



CSJ 4148/2015

ORIGINARIO

Red Surcos S.A. c/ Entre Ríos,  
Provincia de s/ acción  
declarativa de certeza.

*Corte Suprema de Justicia de la Nación*

Concluye que tal proceder resultó violatorio de lo establecido en los citados artículos 9° a 13, 16, 31, 75 -incisos 13, 18 y 19- y 126 de la Constitución Nacional, dado que, a su entender, constituyó una discriminación y el establecimiento de una aduana interior, con afectación de la cláusula comercial, así como de las libertades de circulación y tránsito.

II) A fs. 94/95 vta. dictaminó la señora Procuradora Fiscal, y sobre la base de esa opinión, a fs. 99/101 el Tribunal declaró su competencia originaria para entender en la presente causa.

Asimismo, hizo lugar a la medida cautelar solicitada en el escrito de inicio, por lo que dispuso que la actora tributara en lo sucesivo el impuesto sobre los ingresos brutos aplicando las mismas alícuotas fijadas o que se fijaran en el futuro en las leyes tarifarias provinciales para los contribuyentes que desarrollasen la actividad denominada "fabricación de plaguicidas y productos químicos de uso agropecuario" en establecimientos ubicados en la Provincia de Entre Ríos, y ordenó a la demandada que se abstenga de reclamarle administrativa o judicialmente las diferencias pretendidas por el fisco local en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos por dicha actividad, en el marco del expediente administrativo 1707-110724-2015 de ATER, con fundamento en las previsiones contenidas en los artículos 20 de la ley 10.183, 2° de la ley 10.251 y 13 de la ley 10.270, en tanto la sede de la contribuyente se encuentra fuera del territorio provincial, así como de trabar cualquier medida cautelar administrativa o judicial sobre el patrimonio de la sociedad, hasta tanto se dictara sentencia definitiva en estas actuaciones.

III) A fs. 188/206 vta. la Provincia de Entre Ríos contesta la demanda y solicita su rechazo.

Tras las negativas de rigor, y luego de cuestionar la competencia originaria del Tribunal -planteo que se rechazó a fs. 214-, se opone a la procedencia formal de la acción declarativa, por cuanto sostiene que en el caso no existe un estado de incertidumbre acerca de una relación jurídica determinada, ni se produce un perjuicio o lesión actual al actor, ni se cumple tampoco con el requisito de inexistencia de otro remedio legal.

Por otro lado, defiende la constitucionalidad del régimen cuestionado, y destaca que por el Convenio Multilateral "un mismo contribuyente gravado, que desarrolla actividades en distintas jurisdicciones, encuentra allí la alícuota o porcentaje que corresponde ingresar en cada una de ellas según un nomenclador consensuado, evitando la invasión de facultades o la dificultad en la verificación individual de cada hecho imponible".

En ese mismo sentido, manifiesta que "no resulta admisible plantear la inconstitucionalidad de la alícuota sin denunciar de qué manera precisa las normas entrerrianas afectan un derecho de Red Surcos [S.A.], circunstancia a la que debe adicionarse la necesaria probanza de este presunto perjuicio económico".

Por otra parte, niega que la norma tributaria en crisis afecte la prohibición constitucional de establecer una "aduana interior", y argumenta que tampoco existe discriminación alguna toda vez que la actora no ha denunciado "quiénes son sus competidores locales entrerrianos, que se valdrían de las normas atacadas para obtener una ventaja que lo sitúe en desigualdad de condiciones empresariales".



CSJ 4148/2015

ORIGINARIO

Red Surcos S.A. c/ Entre Ríos,  
Provincia de s/ acción  
declarativa de certeza.

*Corte Suprema de Justicia de la Nación*

Aduce además que Red Surcos S.A. demanda a la Provincia de Entre Ríos en virtud de un régimen promocional que a su criterio es ilegal, pero no advierte que en la Provincia de Santa Fe, sede principal de su giro comercial, tiene una regulación idéntica "que le supone (siguiendo *mutatis mutandis* sus propios argumentos) una ventaja o beneficio ilegítimo o inconstitucional"; lo que demuestra su contradicción.

Solicita, por último, que en el supuesto de que se haga lugar a la demanda, las costas se impongan en el orden causado, dado que "el aspecto central de la alícuota diferencial del impuesto bajo estudio reside en una arista relacionada con la perspectiva o interpretación del juzgador", cuestión esta "contingente y discutible".

IV) A fs. 236 obra el dictamen de la señora Procuradora Fiscal acerca de las cuestiones constitucionales propuestas, que remite a lo dictaminado en su oportunidad en la causa CSJ 505/2012 (48-B)/CS1 "Bayer S.A. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de certeza", donde opinó que correspondía hacer lugar a la demanda.

Considerando:

1º) Que, tal como lo ha decidido el Tribunal a fs. 99/101, esta demanda corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional.

2º) Que la acción deducida constituye una vía idónea para motivar la intervención del Tribunal, pues no se trata de dar solución a una hipótesis abstracta sino que se propone precaver los efectos de la aplicación de las leyes locales 10

.251, 10.183 y 10.270, a la par de fijar relaciones legales que vinculan a las partes en el conflicto (Fallos: 311:421; 318:30; 323:1206; 327:1034, entre otros).

En el presente caso, se advierte que ha mediado una conducta estatal explícita de la demandada dirigida a la aplicación de las alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos que la aquí actora cuestiona (Fallos: 311:421 y 328:4198).

En efecto, la actividad desplegada por la autoridad provincial, de la que da cuenta la prueba documental agregada a la causa (ver fs. 39/78), demuestra que la controversia es actual y concreta (Fallos: 310:606 y 311:421).

3°) Que en cuanto al fondo del asunto, la cuestión a resolver en el caso presenta sustancial analogía con la ya examinada y resuelta por el Tribunal en Fallos: 340:1480 y en la causa CSJ 114/2014 (50-H)/CS1 "Harriet y Donnelly S.A. c/ Chaco, Provincia del s/ acción declarativa de certeza", sentencia del 31 de octubre de 2017, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitir en cuanto fueren aplicables al caso de autos, en razón de brevedad y con el propósito de evitar repeticiones innecesarias.

4°) Que, por lo tanto, la aplicación de las leyes impositivas locales que se cuestionan, en el caso concreto, al gravar a la actora la actividad ya referida en el resultando I, párrafo 1°, con alícuotas más gravosas, obstaculiza el desenvolvimiento del comercio entre las provincias.

5°) Que, en tales condiciones, a la luz de los preceptos constitucionales examinados en las causas citadas en el considerando 3°, y de los criterios fijados por esta Corte a su respecto, en la presente causa queda en evidencia la



CSJ 4148/2015

ORIGINARIO

Red Surcos S.A. c/ Entre Ríos,  
Provincia de s/ acción  
declarativa de certeza.

*Corte Suprema de Justicia de la Nación*

discriminación generada por la legislación provincial en función del lugar de radicación de la "sede" o "establecimiento" industrial del contribuyente, en tanto se lesiona el principio de igualdad (Constitución Nacional, artículo 16), y se altera la corriente natural del comercio (Constitución Nacional, artículos 75, inciso 13, y 126), instaurando así una suerte de "aduana interior" vedada por la Constitución Nacional (artículos 9° a 12), para perjudicar a los productos foráneos en beneficio de los manufacturados en su territorio, extremo que conduce a la declaración de invalidez de la pretensión fiscal de la demandada (Fallos: 340:1480).

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se decide: Hacer lugar a la demanda entablada por Red Surcos S.A. y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad de la distinción, en razón de la ubicación de la sede y del establecimiento donde se desarrolle la actividad industrial del contribuyente o responsable, establecidas respectivamente en los artículos 7° y 8° de la ley 9622, según las modificaciones dispuestas por las leyes 10.183, 10.251 y 10.270, todas ellas de la Provincia de Entre Ríos, como así también la de la pretensión fiscal provincial fundada en dicha normativa, plasmada en la resolución 200/2015 dictada en el expediente administrativo 1707-110724-2015 (fs. 73/74), exclusivamente en cuanto atañe a la cuestión que fue materia de esta causa y a los períodos abarcados por las disposiciones impugnadas. Con costas a la vencida (artículo 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese, comuníquese esta decisión a la Procuración General de la Nación y, oportunamente, archívese.

Parte actora: **Red Surcos S.A.**

Parte demandada: **Provincia de Entre Ríos.**

Profesionales intervinientes: **Dres. Guillermo Andrés Zenklusen; Julio César Rodríguez Signes y Gustavo Adrián Calvinho.**